



Noviembre 2019

NO SEREMOS SILENCIADOS

ACTIVISMO CLIMÁTICO DESDE
LA PRIMERA LÍNEA HASTA LA ONU

INTRODUCCIÓN

Durante este año millones de personas han salido a la calle reclamando acción climática, sin embargo, en la primera línea, valientes activistas continúan siendo silenciados deliberadamente. Las personas que abogan por la justicia climática son amenazadas e intimidadas con violencia, leyes represivas, demandas frívolas y campañas de desinformación, todas diseñadas para sofocar sus llamados a una respuesta más ambiciosa y justa a la crisis climática. Mientras tanto, en las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas (ONU), las voces de los más afectados por la crisis climática, incluidos los jóvenes, siguen sin escucharse, a pesar de los recientes acercamientos al movimiento a York.

Entre los deliberadamente silenciados se encuentra el líder indígena mapuche, [Alberto Curamil](#), ganador del prestigioso Premio Goldman para activistas ambientales. Alberto ha sido encarcelado por el gobierno chileno incluso mientras se prepara para presidir la conferencia anual sobre el clima de la ONU, la Conferencia de las Partes (COP 25), en diciembre de 2019. Los pueblos indígenas siempre han sido los primeros en ser silenciados por proteger a nuestro planeta de la crisis climática, a pesar de su papel esencial. “La gente dice que el movimiento climático comenzó hace décadas, pero yo he visto como los indígenas han protegido la Tierra hace miles de años”, dice [Xiye Bastida](#), activista indígena otomí de 17 años y coorganizadora de la huelga semanal por el clima afuera de la sede de la ONU en Nueva York.

Otras personas deliberadamente atacadas por su activismo climático incluyen estudiantes como [Arshak Makichyan](#) en Rusia, que ha seguido protestando semanalmente, incluso después de que las autoridades negaran su solicitud de huelga masiva el 20 de septiembre de 2019 mientras que en el mundo millones de personas se unían a diversas acciones. Sin inmutarse, Makichyan regresó solo a las calles. “Asumimos riesgos porque no hay seguridad sin futuro”, dice. Las personas saben que enfrentan riesgos por hablar. Durante la apertura de la Cumbre de Acción Climática de la ONU en septiembre de 2019, otra activista climática juvenil, [Paloma Costa de Brasil](#), dijo que defiende el Amazonas incluso a pesar de los peligros, porque tiene más miedo de morir debido a la crisis climática. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha [prometido](#) poner fin a todo activismo en Brasil.

Incluso en la ONU, donde los expertos climáticos exigían tomar medidas más ambiciosas al respecto, la voluntad de los mismos se ha visto limitada desde que en julio de 2019 se borrara un informe científico del registro debido a la presión de Arabia Saudita, país donde el espacio cívico- el espacio para la sociedad civil- se [califica](#) como [cerrado](#) por el [CIVICUS Monitor](#), una plataforma en línea que rastrea las condiciones para la sociedad civil en todos los países. Además, a los representantes de la sociedad civil que asistieron a las reuniones climáticas de la ONU se les negaron visas, fueron deportados y hostigados, incluso después de recibir la acreditación de la ONU.

En lugar de reconocer las importantes advertencias planteadas por los defensores del medio ambiente, las élites políticas y empresariales se han duplicado en los ataques destinados a silenciar la disidencia, incluso cuando el empeoramiento de la crisis climática amenaza la vida y el sustento de miles de millones de personas. Las miles de huelgas semanales que los jóvenes activistas han ayudado a inspirar alrededor del mundo son un testimonio no solo de la creciente urgencia de actuar, sino también de la resistencia y la esperanza del movimiento ecologista. Mientras que la ONU y otros líderes mundiales elogian a la impulsora de las huelgas climáticas, Greta Thunberg, y a otros jóvenes activistas, y mientras que los estados declaran emergencias climáticas a raíz de las acciones de Extinction Rebellion, sus palabras sonarán vacías a menos que también tomen medidas reales para honrar y proteger a innumerables activistas ambientales cuyas vidas han sido dañadas deliberadamente simplemente porque se atrevieron a pedir un mundo ambientalmente más justo.

Los conflictos por la defensa del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales no son nada nuevo. Sin embargo, en combinación con la creciente crisis climática, la [regresión](#) actual de los valores democráticos en muchos países, y la alarmante [disminución](#) del espacio cívico en todo el mundo, se ha creado un ambiente tóxico para muchos activistas del medio ambiente y los derechos a la tierra y sus organizaciones. Los conflictos sobre el suelo fértil, el agua dulce y el aire limpio solo continuarán creciendo si los estados no reconocen la crisis climática como una advertencia de que el uso actual de la tierra y los métodos de producción son insostenibles. Recientes informes de expertos científicos del Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático - sobre el calentamiento global de 1.5 grados centígrados y sobre el uso de la tierra - proporcionan no solo advertencias alarmantes sino también una notable esperanza de que sea posible un camino más sostenible. Sin embargo, este camino no será factible si los estados y las empresas continúan viendo los recursos naturales y las personas que los valoran como un obstáculo en lugar de un recurso valioso.

Poner fin a la supresión del activismo en la crisis climática es esencial. Mientras que las huelgas de Extinction Rebellion fueron prohibidas en Londres, Reino Unido, en septiembre de 2019, muchos participantes en las protestas climáticas han señalado que los inconvenientes de la protesta pacífica palidecen en comparación con las consecuencias de retrasar aún más la acción climática.

La primera parte de este documento de CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, se basa en estudios de caso y entrevistas para ilustrar el poder del creciente movimiento global de justicia climática, así como los tipos de restricciones que están frenando al activismo climático. Estos incluyen nuevos ataques contra el movimiento climático juvenil y ataques de larga duración contra defensores del medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas que a menudo se han enfrentado a las restricciones más severas para expresar su sabiduría ambiental.

La segunda parte de este documento detalla cómo los estados miembros de la ONU no han escuchado y respondido colectivamente a los movimientos por la justicia climática, y hace recomendaciones a los estados y agencias de la ONU sobre cómo nuevos esfuerzos para reconocer la agencia y las demandas del movimiento climático juvenil en las políticas y la planificación climática podría hacerse más significativos.

NO SEREMOS SILENCIADOS: ACTIVISMO CLIMÁTICO DESDE LA PRIMERA LÍNEA HASTA LA ONU

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation position paper, November 2019

Autores: Lyndal Rowlands y Natalia Gomez Peña Colaboradores: Débora Leão

Editores: Inés M Pousadela, Andrew Firmin y Silvia Puerto Aboy

Traducción: Natalia Gomez Peña



Imagen de portada: Jóvenes en la huelga climática global de septiembre de 2019 en Santiago, Chile.

Crédito: Getty Images / Agencia Makro / Colaborador

Imagen: Greta Thunberg se une a la huelga climática semanal fuera de las Naciones Unidas en Nueva York.

Crédito: Foto ONU / Manuel Elias

PARTE 1: MUERTE Y DESINFORMACIÓN

EL SILENCIO ENSORDECEDOR EN TORNO AL SILENCIAMIENTO DE LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE

El activismo ambiental es la forma de activismo más mortal y peligrosa a nivel mundial. Según el [Análisis Global 2018](#) de Front Line Defenders, los defensores ambientales, incluidos los activistas climáticos, los defensores del agua y los líderes indígenas, tienen más del triple de probabilidades de ser asesinados que los defensores que trabajan en otros campos. Al menos 164 defensores ambientales de los derechos humanos fueron asesinados en 2018, según el grupo de derechos humanos y ambientales [Global Witness](#). Los países más mortales para los defensores del medio ambiente en 2018 fueron, en orden, Filipinas, Colombia, India, Brasil y Guatemala, y los principales impulsores de los asesinatos fueron las industrias extractivas.

La criminalización y la desinformación son estrategias comunes utilizadas para reprimir y debilitar a activistas, organizaciones y comunidades que protegen el medio ambiente. Esta criminalización del movimiento climático a menudo se ajusta a tres [categorías](#) amplias: el control autoritario del espacio público y la restricción del derecho de protesta por parte de los estados; el uso de desinformación y propagación del discurso de odio por parte de grupos estatales y no estatales; y el abuso de leyes y regulaciones para criminalizar el activismo por parte de los estados.

AUMENTO EL CONTROL SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO Y LAS RESTRICCIONES AL DERECHO DE PROTESTA

El [CIVICUS Monitor](#) documenta la represión de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, reflejando tendencias preocupantes en el cierre del espacio para la sociedad civil - espacio cívico - en todas las regiones del mundo. Con el pretexto de mantener el orden público, las autoridades estatales de numerosos países han introducido [cambios legales](#) para crear controles más estrictos del espacio público.

Además, en muchos países, las acciones no violentas, como marchas, bloqueos de caminos y ocupaciones, que históricamente han sido empleadas por una variedad de movimientos de protesta, se han codificado como delitos. Los sistemas de justicia penal también se usan sistemáticamente para inhibir las protestas, y los activistas pueden terminar encarcelados por organizar o participar en manifestaciones. Además, existe una creciente hostilidad hacia la protesta pacífica que conduce al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, desatando la violencia y la muerte.

Las movilizaciones de [Rise for Climate 2018](#) exigieron la protección del medio ambiente e instaron a los estados a comprometerse con las energías limpias. Pero la participación de activistas pacíficos y campesinos del Movimiento Ríos Vivos en Colombia fue [ilegalmente obstruida](#) por la policía en la ciudad de Ituango. [Ríos Vivos](#) es un movimiento de derechos humanos compuesto por comunidades afectadas por los impactos de Hidroituango, uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes de América Latina, actualmente en construcción en el río Cauca.

Los jóvenes huelguistas climáticos también se han enfrentado a desafíos en la organización de huelgas. En Rusia, a los estudiantes se les negaron los permisos para realizar huelgas que involucren a más de una persona, incluido el permiso para realizar una huelga masiva en Moscú el 20 de septiembre de 2019, el día de la huelga climática global. [Arshak Makichyan](#), un estudiante de música que ha organizado huelgas semanales en Moscú, a menudo protestando solo o con otros huelguistas que se organizan para protestar uno por uno, dice que a pesar de las dificultades para obtener permisos, planea perseverar. "Organizar huelgas masivas también es muy difícil", dijo a CIVICUS en una entrevista. "Por lo general, el gobierno se niega a autorizarlas sin siquiera proporcionar una razón o solo le permite protestar en lugares donde no mucha gente puede ver su protesta. Pero a pesar de los desafíos, no nos vamos a rendir. Puede que el activismo no funcione lo suficientemente rápido, pero funciona ".

En muchos países, los jóvenes y los niños no solo enfrentan presión social y política y desánimo, sino también [barreras legales](#) que impiden que las personas menores de 18 años protesten. En los Estados Unidos, una estudiante de 13 años fue [arrestada](#) en Seattle en agosto de 2019 por usar tiza para pintar letreros de una huelga climática en el pavimento.

ESTUDIO DE CASO: ACTIVISTAS QUE PROTESTABAN CONTRA OLEODUCTOS DETENIDOS EN CANADÁ

Catorce activistas que protestaban contra un propuesto oleoducto que atravesaría el territorio de las Primeras Naciones en Columbia Británica, Canadá, fueron arrestados el 8 de enero de 2019. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) dijo que estaban haciendo cumplir una orden judicial contra los miembros de Wet'suwet'en First Nation que estaba bloqueando el acceso a un sitio de construcción del oleoducto. En Vancouver, cientos de personas marcharon contra los arrestos, algunos con carteles con mensajes como “no oleoductos en tierras robadas” y “el clima está cambiando, ¿por qué no cambiamos nosotros?”

Además, el 30 de abril de 2019, la RCMP arrestó a un hombre de 71 años por desafiar presuntamente una orden judicial que prohíbe manifestaciones a menos de cinco metros de un oleoducto después de que él trepara a un árbol cerca del sitio. En un incidente separado, tres mujeres fueron arrestadas por el RCMP el 10 de abril de 2019 por presuntamente no abandonar su campamento de protesta después de una orden judicial para hacerlo. Las mujeres formaban parte de un gran grupo que había estado acampando en el sitio cerca de un proyecto de gas natural en Fort Ellis, Nueva Escocia, durante casi dos años. La RCMP también impidió que otros manifestantes visitaran el campamento de protesta. “Sabemos que tenemos razón, este es nuestro derecho, este es nuestro derecho inherente y debe ser el derecho de los nova escoceses permanecer y proteger su agua”, dijo Dorene Bernard, miembro de la Primera Nación Sipekne'katik, quien vive en la zona.



***PERO A PESAR DE
LOS DESAFÍOS,
NO NOS VAMOS
A RENDIR. PUEDE
QUE EL ACTIVISMO
NO FUNCIONE LO
SUFICIENTEMENTE
RÁPIDO, PERO
FUNCIONA “***

ARSHAK MAKICHYAN
RUSSIA

ESTIGMATIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DISCURSO DEL ODO

Las campañas de estigmatización y difamación contra las personas defensoras del medio ambiente buscan crear el ambiente necesario para permitir el uso del derecho penal y la perpetración de violencia contra los defensores. Las campañas de desprestigio a menudo se complementan con maniobras burocráticas que obstaculizan el funcionamiento normal de las organizaciones y los movimientos sociales. La vilificación a menudo allana el camino para nuevas restricciones legales y extralegales a activistas y organizaciones, y las campañas de desprestigio se utilizan como justificación de leyes y regulaciones restrictivas, dejando a los defensores en una grave situación de vulnerabilidad.

Las campañas de estigmatización se desarrollan mediante la difusión de información falsa en los medios nacionales, locales y comunitarios, así como a través de las redes sociales. Diversos tipos de grupos e individuos están involucrados en campañas de estigmatización, incluidas empresas, grupos no estatales anti- derechos y altos funcionarios estatales que hacen declaraciones públicas contra activistas y los posicionan como anti-desarrollo, desestabilizadores de la democracia o extremistas y terroristas. Otra táctica de uso común es acusar a los grupos ambientalistas de ser agentes de influencia extranjera, lo que implica que no representan genuinamente las preocupaciones locales. Estas calumnias buscan socavar el trabajo de los defensores del medio ambiente y crear una percepción negativa sobre ellos entre el público.

Cuando la atención internacional se centró en los incendios en la Amazonía en agosto de 2019, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien como candidato prometió poner fin a todo activismo en su país, acusó a los grupos ambientalistas de iniciar deliberadamente incendios en la Amazonía para ganar simpatía internacional y fondos. Adriana Ramos, asesora del Instituto Socioambiental, una organización de la sociedad civil (OSC) brasileña, dijo a CIVICUS en una entrevista que acusaciones como estas “agotan todas las energías [de la sociedad civil] al obligarnos a centrarnos en responder a acusaciones tan atroces. Cuando el presidente hace tales declaraciones y la prensa las denuncia, y terminamos teniendo que defendernos. Estamos en una posición en la que necesitamos responder a declaraciones completamente infundadas hechas por el Presidente. Esta es claramente una estrategia de desmovilización, ya que paraliza nuestras actividades principales y dificulta [nuestro trabajo]”.

Si bien el espacio digital ha ayudado a los nuevos movimientos climáticos a organizarse, reclutar apoyo y compartir solidaridad, también se ha convertido en un lugar donde experimentan trolling y hostigamiento. Incluso cuando Greta Thunberg estaba navegando a través del Atlántico, con solo un teléfono satelital para comunicarse, ella y otros jóvenes activistas climáticos fueron atacados por negadores del cambio climático. Adultos prominentes, incluidos comentaristas y periodistas conservadores de los medios, así como trolls y bots anónimos, han dirigido el acoso persistente y selectivo hacia los huelguistas estudiantiles. El acoso en línea de activistas climáticos y científicos climáticos se dirige especialmente a las mujeres. En Australia, Andrew Bolt, un destacado columnista conservador del periódico Murdoch News Corp, dedicó un artículo de opinión completo a criticar a Greta, mientras que el primer ministro australiano Scott Morrison expresó su descontento con las huelgas climáticas en las escuelas y dijo: “Lo que queremos es más aprendizaje en las escuelas y menos activismo”.

ESTUDIO DE CASO: GUATEMALA: AUMENTAN LOS ASESINATOS DE DEFENSORES INDÍGENAS DESPUÉS DE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE JIMMY MORALES

En 2018, Guatemala se convirtió en el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente según el número de asesinatos per cápita. Según Global Witness, los asesinatos de defensores ambientales aumentaron en un 500 por ciento en 2018. La mayoría de los defensores asesinados eran miembros de comunidades indígenas.

El 2 de mayo de 2018, el presidente Jimmy Morales describió públicamente a los miembros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), una organización indígena, como delincuentes. Durante el mes siguiente a esta declaración, cuatro líderes indígenas de CODECA y tres líderes de otra organización, el Comité Campesinos del Altiplano, fueron asesinados. La sociedad civil en Guatemala ha denunciado estas acusaciones, junto con la campaña de desinformación en curso, que ha resultado en que CODECA y otras organizaciones sean vistas como un “enemigo interno” del Estado y, por lo tanto, ha creado una atmósfera para permitir el asesinato de defensores.

ESTUDIO DE CASO: INJERENCIA EXTRANJERA: AUSTRALIA/INDIA Y LA MINA DE CARBÓN Y EL PUERTO DE ADANI

Tanto el gobierno australiano como el indio han mantenido ataques sostenidos contra grupos ambientalistas que se oponen a la construcción de una nueva mina en Australia que enviará carbón a la India a través de un puerto en el borde de la Gran Barrera de Coral.

Según los informes, los intereses comerciales extranjeros influyeron en el gobierno australiano para aprobar la mina a pesar de las preocupaciones generalizadas sobre su impacto ambiental y los beneficios económicos limitados. Sin embargo, ambos gobiernos han acusado a las OSC de ser agentes de influencia extranjera. Estas acusaciones se han hecho por la oposición a la mina por parte de los grupos indígenas locales, y a pesar del impacto global de las emisiones de carbono de la mina, que contradicen los compromisos de Australia en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

En agosto de 2019, Adrian Burragubba, un hombre de Wangan y Jagalingou y propietario tradicional de la tierra donde se construirá la mina, se declaró en bancarrota con casi AUD 600,000 (aproximadamente US \$ 410,500) en costos legales asociados con su lucha para poner fin a la construcción de la mina.

La legislación propuesta por el gobierno australiano, con el pretexto de limitar la influencia extranjera en la política australiana, se dirigió específicamente a las OSC, incluyendo Get Up!, uno de los opositores más ruidosos de la mina. A pesar de que la legislación propuesta se centra en la influencia extranjera en la política australiana, no se impusieron restricciones a compañías como Adani, la corporación minera india responsable de la mina, para evitar que hagan donaciones a partidos políticos.

El gobierno australiano también ha tratado de limitar la atención internacional centrada en la mina, incluso arrestando a un equipo de filmación documental de la cadena nacional francesa France 24 que filmaba cerca del sitio de construcción, y posteriormente prohibiéndoles ir a menos de 20 kilómetros del sitio.

En la India, las OSC han sido objeto de estrictas leyes de financiación extranjera, lo que les impide recibir donaciones de fuentes internacionales. Greenpeace India ha sufrido ataques permanentes por parte del gobierno indio tras sus campañas contra la minería de carbón insostenible tanto en Australia como en India.



Los huelguistas climáticos estudiantiles en Australia protestan contra la mina de carbón Adani.

CRÉDITO: © Genevieve French / Greenpeace

LA JUDICIALIZACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA REPRIMIR EL ACTIVISMO AMBIENTAL

El eslabón final en la cadena de criminalización es el uso deliberado del sistema de justicia contra activistas ambientales y sus organizaciones para socavar su trabajo y desalentar a otros a unirse a ellos. Estos ataques no solo limitan el trabajo de la persona defensora en cuestión, sino que también evitan que las comunidades continúen defendiendo sus derechos. La criminalización también causa graves consecuencias, que a menudo incluyen importantes cargas financieras y efectos psicosociales tanto para un defensor como para su familia y comunidad. La acción climática exige una sociedad civil comprometida y activa. Sin embargo, cuando los defensores son criminalizados, tienen que gastar tiempo y recursos defendiéndose, en lugar de trabajar por las causas que representan.

ESTUDIO DE CASO: LITIGIOS Y LEGISLACIÓN DE EE. UU. PARA DISUADIR EL ACTIVISMO CLIMÁTICO

La reserva indígena de Standing Rock se convirtió en un símbolo de las luchas de los pueblos indígenas a nivel mundial. Desde 2016, la comunidad ha participado en una sucesión de protestas que ha dejado cientos de detenidos. Las protestas se organizaron en oposición al oleoducto Dakota Access, que constituye una amenaza para el suministro de agua de la comunidad, y destacaron las consecuencias ambientales de la extracción de combustibles fósiles. El oleoducto finalmente comenzó a operar en junio de 2017.

El movimiento Standing Rock causó preocupación entre las empresas extractivas, que se movieron rápidamente para reprimirlo. Primero, debido a las protestas en Standing Rock, Greenpeace y otros manifestantes fueron sometidos a SLAPPs (sigla en inglés de demandas estratégicas contra la participación pública) por la compañía detrás del proyecto. Las SLAPPs se utilizan a nivel mundial para prevenir la disidencia y desalentar a los activistas climáticos.

Según la coalición Protect the Protest, un grupo de OSC que han experimentado SLAPPs, las corporaciones, bufetes de abogados e individuos están utilizando los litigios para intimidar y reprimir el activismo. La coalición argumenta que si bien las SLAPPs intentan hacerse pasar por demandas civiles legítimas, quienes están detrás de ellas saben que no hay bases legales reales para emprender acciones, pero las usan con la esperanza de silenciar a quienes hablan por el medio ambiente. La táctica es similar a las técnicas de criminalización conocidas que utilizan el derecho penal para intimidar a los activistas y obligarlos a gastar su tiempo y recursos defendiéndose en lugar de abogar por sus causas.

La preocupación por el uso de SLAPPs está creciendo. En Canadá, Greenpeace es objeto de una demanda por parte de la empresa forestal Rolute Forest Products. La misma compañía también inició una demanda contra Greenpeace USA en 2016. En Francia, compañías del Grupo Bolloré demandaron a periodistas y OSC que informaron sobre protestas contra el acaparamiento de tierras y la explotación en las plantaciones de aceite de palma de las compañías en Camerún. En Sudáfrica, Human Rights Watch ha denunciado cómo algunas compañías mineras han intentado intimidar a los activistas a través del sistema judicial al solicitar multas, utilizando las prohibiciones judiciales para evitar protestas y, al menos en un caso, presentando una demanda SLAPP contra las OSC.

Como ha sido reportado por el Informe del estado de la sociedad civil de CIVICUS, los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente y los derechos a la tierra a menudo se ven atacados cuando intentan protegerse a sí mismos, y a sus comunidades, contra el poder transnacional de la infraestructura y las industrias extractivas y de los estados estrechamente relacionados con esos industrias.

En el caso de Standing Rock, la comunidad todavía está luchando contra el poder de la industria extractiva, buscando proteger su agua contra el riesgo constante de derrames de petróleo. Según el Pipeline Safety Trust, la tubería que va de Dakota del Norte a Illinois ha tenido al menos 10 derrames desde que comenzó a operar. Energy Transfer y su subsidiaria Dakota Access LLC solicitaron en junio de 2019 duplicar las cantidades de petróleo crudo que transporta el oleoducto, lo que aumenta el riesgo para las comunidades indígenas.

Actualmente, la comunidad está involucrada en un nuevo desafío legal para proteger su territorio, pero algunos de los manifestantes aún enfrentan demandas individuales. Aunque la SLAPP de 900 millones de dólares americanos contra Greenpeace y otros fue desestimada por un tribunal federal en marzo de 2019, la compañía decidió volver a presentar la demanda ante un tribunal estatal.

Después de que el movimiento social que se unió detrás de la comunidad de Standing Rock demostró el poder de las personas para defender sus derechos, algunos gobiernos estatales de EE. UU. y el gobierno federal se han movido para promulgar una nueva legislación para restringir el derecho a protestar. Desde febrero de 2017, el CIVICUS Monitor ha estado informando sobre cómo estados como Georgia y Dakota del Sur han tratado de limitar las tácticas de protesta, aumentar las sanciones o ampliar la definición de terrorismo interno.

Información reciente indica que en 18 estados de EE. UU. Los legisladores han introducido una legislación para criminalizar las protestas contra los oleoductos, y en nueve estados han tenido éxito y han clasificado tales manifestaciones como delitos graves. Se ha reportado que un grupo de empresas de servicios químicos, eléctricos, de gas y petróleo presionaron enérgicamente estas leyes en respuesta a las protestas de Standing Rock.

En junio de 2019, se anunció que el gobierno federal de los Estados Unidos estaba introduciendo una legislación que castigaría a las personas con sentencias de hasta 20 años de prisión por la acción de “inhibir” la operación de un oleoducto o gasoducto. La sociedad civil continúa resistiendo las nuevas restricciones. Los abogados en los Estados Unidos están demandando las nuevas leyes, buscando proteger la libertad de las personas para expresar su disidencia, y los activistas en todo el país continúan exigiendo el fin de la dependencia de los Estados Unidos de los combustibles fósiles.

Defensores del agua. Las protestas por el oleoducto en Dakota continúan.



PARTE 2: NEGOCIACIONES INTERNACIONALES CIERRAN LA PUERTA A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA

VOCES RESTRINGIDAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS INTERNACIONALES.

Los activistas y organizaciones de primera línea de la sociedad civil tienen el conocimiento y la experiencia necesarios para una acción ambiciosa en favor de la justicia climática, en parte debido a sus experiencias de ayudar a las comunidades a adaptarse de manera inclusiva e interseccional a los desastres inducidos por el clima. Sin embargo, las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas (ONU) siguen siendo inaccesibles. A pesar de tener el conocimiento y la experiencia necesarios para influir en las negociaciones, la sociedad civil experimenta numerosos factores fuera de su control que obstaculizan su influencia.

La participación de la sociedad civil en las recientes conversaciones sobre el clima de la ONU ha sido restringida a través de la denegación de visas, deportaciones y oportunidades limitadas para que las organizaciones acreditadas por la ONU registren representantes. Incluso cuando los representantes de la sociedad civil tienen la oportunidad de participar, a menudo se pasan por alto sus perspectivas y conocimiento, pese a haber sido los primeros en responder a la crisis climática. Aún más preocupante, al no condenar a los estados miembros que violan los derechos de las personas a participar en el activismo ambiental, la ONU ha seguido permitiendo que estos estados descarguen las conversaciones climáticas y desentrañen el Acuerdo de París, sin ninguna responsabilidad ante su propio público.

Por el contrario, si bien la participación de la sociedad civil en las conversaciones sobre el clima de la ONU ha sido restringida, el sector privado ha sido bien recibido e incluso cortejado por la ONU. Sin ir más lejos, un ejecutivo de la compañía de combustibles fósiles Shell ha presumido de haber ayudado a escribir una sección del Acuerdo de París. Además, los ejecutivos de las principales compañías de combustibles fósiles celebraron su propia cumbre cerca de la Cumbre de Acción Climática de la ONU de septiembre de 2019, extendiendo invitaciones a las delegaciones estatales. Mientras tanto, los intereses del sector privado continúan invirtiendo significativamente sus esfuerzos en negar el cambio climático y retrasar la acción sobre la defensa de la justicia climática.

El análisis publicado en la revista Climatic Change descubrió que las compañías de combustibles fósiles gastaron más que los defensores del medio ambiente en los EE.UU. en un factor de 10 a uno entre 2000 y 2016. En octubre de 2019, se reveló que el gigante tecnológico Google ha realizado grandes donaciones políticas a centros de pensamiento y lobbies negacionistas del cambio climático.

RESTRICCIONES EN EL ESPACIO CÍVICO ANTES Y DURANTE COP

COP 24: Katowice, Polonia

En la Conferencia anual de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, miles de representantes de estados, sociedad civil, academia y sector privado se reúnen para negociar y revisar la respuesta internacional al cambio climático. En la COP 24, celebrada en Katowice, Polonia en 2018, se vivieron una serie de preocupantes restricciones que impidieron que los representantes de la sociedad civil participaran adecuadamente en la reunión. Al menos a 15 activistas climáticos se les negó la entrada, fueron deportados o arrestados e interrogados fuertemente. Mientras que muchos miembros de la sociedad civil se quedaron fuera, el gobierno polaco se asoció con compañías de combustibles fósiles y carbón para patrocinar la conferencia.

En enero de 2018, el gobierno polaco introdujo una nueva ley que otorgo a la policía y los servicios secretos mayores poderes de vigilancia para recopilar y procesar datos personales sobre todos los participantes de



la COP 24, incluso mediante la obtención de información de otros estados, sobre la base de que algunas personas plantearían una amenaza para la seguridad pública. La ley también incluyó una disposición que prohibía las asambleas pacíficas espontáneas en Katowice entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre de 2018, durante la COP 24. Los grupos internacionales de la sociedad civil expresaron su preocupación por estas medidas, al igual que los expertos en derechos humanos de la ONU.

Estas restricciones limitaron la capacidad de la sociedad civil para responder a los acontecimientos preocupantes en las negociaciones de la COP 24, que incluyeron a varios estados que tomaron medidas para socavar los hallazgos del informe histórico del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre el calentamiento global de 1,5 grados centígrados y dilucidar aspectos cruciales del Acuerdo de París, como los créditos de carbono. La Climate Action Network, una red de la sociedad civil que comprende más de 1.300 organizaciones que trabajan en más de 120 países, concluyó que los estados no habían respondido con urgencia a la crisis climática en la COP 24.

Los estados que deseen organizar una reunión de la COP deben demostrar su compromiso con los derechos humanos y la participación de las personas, y mostrar liderazgo a nivel mundial y regional en temas climáticos.

COP 25: Chile

En el periodo previo a la COP 25, que debía realizarse en Chile en diciembre de 2019, la sociedad civil chilena e internacional había instado al gobierno chileno a cumplir con su compromiso público de garantizar una conferencia abierta y participativa. Chile, un líder de larga data en la participación de la sociedad civil en los acuerdos ambientales, fue el principal negociador del Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional que incluye disposiciones específicas para la protección de los defensores del medio ambiente. Sin embargo, a pesar de su temprano apoyo, el gobierno chileno hasta ahora no ha firmado ni ratificado el acuerdo, poniendo en duda su compromiso con la participación de las personas y la acción climática.

La reciente represión a las protestas ciudadanas en Chile en octubre de 2019 ha agravado el panorama de la participación ciudadana en el país. Mientras que la sociedad civil chilena pidió al gobierno que retirara a los militares de las calles antes de la COP, la administración de Piñera respondió en su lugar cancelando la realización de la Conferencia en el país, la cual finalmente se llevará a cabo en Madrid, con Chile como presidencia.

Aunque las protestas comenzaron inicialmente después de un aumento en la tarifa de las tarjetas de metro

en la capital, Santiago, rápidamente se convirtieron en un movimiento nacional que exigía equidad, justicia social y participación ciudadana. Según el [Instituto de Derechos Humanos de Chile](#), al 29 de octubre, la crisis había dejado más de 3.500 detenidos, más de 1100 heridos y al menos 5 muertes que involucran a la policía nacional. La Plataforma de la [Sociedad Civil por la Acción Climática](#), una coalición de más de 150 organizaciones chilenas, que trabajan en torno a la COP 25, ha pedido públicamente al gobierno que respete los derechos humanos e incluya soluciones para diversas crisis ambientales en la agenda de la COP, incluida la crisis del agua y las emisiones de carbono.

En los meses anteriores a la COP 25, las organizaciones y activistas ambientales chilenas han [informado](#) de niveles crecientes de acoso, particularmente de compañías responsables de proyectos de energía y de industrias extractivas en partes remotas del país. Los grupos y activistas de la sociedad civil están preocupados de que el gobierno chileno no haya proporcionado información actualizada sobre los niveles crecientes de criminalización, violencia y amenazas a los que se enfrentan.

En 2019, el prestigioso Premio Goldman, ampliamente considerado como el Premio Nobel de la comunidad ambiental, fue otorgado a Alberto Curamil, un líder indígena mapuche, que en este momento sigue encarcelado después de llevar a su comunidad a detener dos proyectos hidroeléctricos que amenazaban el valle sagrado del río Cautín en Chile.

Por primera vez en 2018, Chile fue [incluido](#) en el informe de Global Witness sobre asesinatos de defensores del medio ambiente, con dos asesinatos reportados. Existe una investigación abierta por el asesinato del defensor indígena [Camilo Catrillanca](#) en noviembre de 2018. Camilo se oponía a los proyectos forestales que afectaban a su comunidad. Mientras que el caso de [Alejandro Castro](#), un líder que trabajó en la contaminación de los pueblos de Quintero y Puchancavi, se encuentra actualmente en investigación bajo hipótesis de suicidio, existe información de que había sido objeto de amenazas debido a su papel como ambientalista.

En octubre de 2019, dos reconocidos activistas ambientales, Katta Alonso de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia y Rodrigo Mundaca, líder del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, recibieron nuevas amenazas que fueron [condenadas](#) por Red de la Sociedad Civil para la Acción Climática en Chile.

La sociedad civil chilena ve la COP 25 como una oportunidad para que su Estado muestre liderazgo no solo en la agenda del cambio climático sino también en términos de protección para los activistas climáticos, incluidos los líderes indígenas. Gabriela Burdiles, directora de proyecto de la organización chilena Fiscalía del Medio Ambiente, expresó esta esperanza y dijo a CIVICUS en una [entrevista](#): "Las reuniones de la COP necesitan la participación de la sociedad civil, y una COP participativa debería incluir eventos paralelos realizados por la sociedad civil, académicos, gobiernos y otros actores, en el marco de la conferencia oficial y en el espacio verde, también debería facilitar las movilizaciones en espacios públicos y actividades en foros de otros ciudadanos. En este contexto, esperamos que Chile pronto firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, y que este será el comienzo de un camino que nos llevará a una forma diferente de tomar decisiones, en la que las agendas que buscan alentar la inversión no socavarán los derechos fundamentales de las personas y las comunidades".

"LAS REUNIONES DE LA COP NECESITAN LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, Y UNA COP PARTICIPATIVA DEBERÍA INCLUIR EVENTOS PARALELOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CIVIL, ACADÉMICOS, GOBIERNOS Y OTROS ACTORES, EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA OFICIAL Y EN EL ESPACIO VERDE, TAMBIÉN DEBERÍA FACILITAR LAS MOVILIZACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES EN FOROS DE OTROS CIUDADANOS.

GABRIELA BURDILES,
CHILE



IMPEDIMENTOS PARA ACCEDER

Los resultados de la Cumbre de Acción Climática de la ONU, celebrada en Septiembre de 2019 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se predeterminaron en parte en una reunión previa celebrada en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en julio de 2019. En esa reunión se desarrollaron nueve líneas de acción, incluida una línea sobre la participación juvenil y Movilización Pública. Sin embargo, el espacio cívico en los Emiratos Árabes Unidos está calificado como cerrado por el [CIVICUS Monitor](#), lo que significa que la sociedad civil allí era poco probable que pudiera ejercer sus derechos de movilización pública o ser libre de influir en los resultados de la reunión. Mientras que los defensores de la justicia climática global fueron invitados a participar en las discusiones, las organizaciones y activistas locales se ven obligados a operar en circunstancias desafiantes todos los días.

Los delegados de la sociedad civil y la juventud a la Cumbre del clima juvenil y la Cumbre de Acción Climática de la ONU recibieron su notificación con poco tiempo previo para poder asistir. Fathi Bashi de Somalia fue uno de los 100 jóvenes que recibió un Boleto Verde especial para asistir a la Cumbre del Clima Juvenil, pero no pudo obtener una visa. [Dijo a CIVICUS](#) que esperaba participar y compartir sus puntos de vista sobre cómo la crisis climática está afectando a Somalia: “Somalia es uno de los lugares más vulnerables al cambio climático. Hemos visto el impacto del cambio climático en mi comunidad, con los frecuentes sequías y la escasez de agua. Creo que no podemos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no abordamos la crisis climática. Quiero que los líderes mundiales tomen la crisis climática en serio, en serio, en serio “.

Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en estado consultivo con la ONU solo fueron notificadas de que su registro había sido aprobado menos de una semana antes de la Cumbre de Acción Climática, lo que hace extremadamente difícil que asistan representantes que aún no están en Nueva York. Los retrasos y las denegaciones de visas limitan particularmente la participación de la sociedad civil de países sin centros de procesamiento de visas de EE. UU., donde hay largos tiempos de procesamiento de visas o donde los solicitantes se enfrentan a una evaluación adicional conocida como “investigación extrema”.

El Acuerdo del país anfitrión de las Naciones Unidas estipula que los Estados Unidos otorgarán visas a los “representantes de organizaciones no gubernamentales” que participen en las reuniones de la ONU. Sin embargo, numerosos asistentes de la sociedad civil han informado de que los largos períodos de procesamiento, investigación de antecedentes y negaciones les han impedido participar.

NEGOCIACIONES CLIMÁTICAS INCLUSIVAS

La línea de Participación Juvenil y Movilización Pública, que está codirigida por los gobiernos de Irlanda y las Islas Marshall, [describe](#) sus objetivos como: “Movilizar a las personas en todo el mundo para que tomen medidas sobre el cambio climático y garanticen que los jóvenes estén integrados y representados en todos aspectos de la Cumbre [Acción por el clima]. “Las personas se han movilizado desde cero para la justicia climática y la acción durante décadas, y es importante que las instituciones internacionales lo reconozcan y hagan esfuerzos para apoyar y permitir las movilizaciones”. Sin embargo, muchos estados miembros de la ONU han hecho poco para mantener las responsabilidades de los estados de proteger las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión que son esenciales para proteger a las personas que participan. Incluso algunos estados que se posicionan como líderes de acción climática están restringiendo simultáneamente el espacio cívico a nivel nacional.

Incluso cuando los activistas y las organizaciones de la sociedad civil obtienen acceso a las negociaciones climáticas de la ONU, su sabiduría y conocimiento, como testigos de primera línea y primeros en responder a la crisis climática, a menudo son ignorados, por lo que se ha convertido en un proceso extremadamente técnico y opaco. Hay dificultades para traducir los llamamientos de los activistas climáticos en las calles al lenguaje inaccesible utilizado por los negociadores climáticos.

[Maria Nailevu](#), una feminista y activista climática de Fiji, dice que si bien las personas de los grupos excluidos han sido invitadas a participar en las negociaciones climáticas, su sabiduría a menudo se ha pasado por alto, en parte debido a la naturaleza técnica de las negociaciones: “Parece que prevalece la

narrativa de que cuando eres del Sur Global o de una comunidad marginada, no eres más que una víctima. Esto desvía la atención de la creación de espacios para que las mujeres de base y los grupos marginados tengan una voz directa, compartiendo sus realidades y sus estrategias de una manera que las personas que toman decisiones puedan escuchar y aprender ... Existen iniciativas feministas dirigidas por mujeres y el conocimiento indígena y tradicional debe priorizarse e integrarse dentro de nuestras respuestas climáticas”. Sin embargo, ha habido excepciones, dice, como el Diálogo de Talanoa, basado en las tradiciones fijianas de diálogo inclusivo, participativo y transparente, que fue parte de la COP 23 organizada por Fiji en 2017.

María continúa diciendo: “Como feminista de base, activista por el clima y una mujer con identidades diversas, personalmente sentí que era una plataforma maravillosamente diseñada debido a la oportunidad que brindaba a diversas voces para tener una voz directa en el proceso. Creo que los responsables de la toma de decisiones deberían crear y apoyar espacios más inclusivos y seguros que fomenten la expresión de diversas perspectivas y se alejen del tokenismo y se centren en las capacidades técnicas “.

Nisreen Al Sayeem, presidenta de la Organización Juvenil de Sudán para el Cambio Climático y negociadora junior en las Negociaciones Climáticas de la ONU, habló con CIVICUS sobre cómo los jóvenes como ella en Sudán, que participan en incidencia ante la ONU, están fundamentando su participación en respuestas comunitarias a la crisis climática: “Los jóvenes en Sudán están tomando tres caminos diferentes para comprometerse con el cambio climático: política, activismo, incluida la promoción, las campañas y el trabajo en organizaciones de la sociedad civil, y el trabajo basado en la comunidad. El trabajo basado en la comunidad es lo que está haciendo la mayoría de los jóvenes en Sudán, porque se dan cuenta de que los responsables políticos no son lo suficientemente rápidos y el trabajo de la sociedad civil no es lo suficientemente inclusivo “.

Más de siete millones de personas emprendieron acciones de huelga por la justicia climática durante la misma semana de la Cumbre juvenil y la Cumbre de Acción Climática de la ONU; ambas reuniones finalmente no cumplieron con las ambiciosas demandas de los jóvenes que lideraron las huelgas. Se alcanzaron algunos logros pequeños en la Cumbre de Acción Climática, como 41 estados que se comprometieron a consultar a los jóvenes en sus planes climáticos nacionales. Sin embargo, hay pocos indicios de que la ONU responsabilizará a los estados por estos compromisos voluntarios.



***EL TRABAJO BASADO EN LA
COMUNIDAD ES LO QUE ESTÁ
HACIENDO LA MAYORÍA DE LOS
JÓVENES EN SUDÁN, PORQUE
SE DAN CUENTA DE QUE LOS
RESPONSABLES POLÍTICOS NO
SON LO SUFICIENTEMENTE
RÁPIDOS Y EL TRABAJO DE
LA SOCIEDAD CIVIL NO ES LO
SUFICIENTEMENTE INCLUSIVO
”.***

NISREEN AL SAYEEM
SUDAN

DESCARRILAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Las conversaciones sobre el clima de la ONU se basan en el consenso, lo que significa que los estados que no son responsables ante su gente a menudo pueden ejercer un poder considerable. Debido a que todos los estados miembros deben estar de acuerdo para que las conversaciones progresen, los estados represivos pueden insistir en los acuerdos de mínimo común denominador sabiendo que la presión pública



“EXISTEN INICIATIVAS FEMINISTAS DIRIGIDAS POR MUJERES Y EL CONOCIMIENTO INDÍGENA Y TRADICIONAL DEBE PRIORIZARSE E INTEGRARSE DENTRO DE NUESTRAS RESPUESTAS CLIMÁTICAS”.

MARIA NAILEVU
FIJI

interna será silenciada. Los estados que han socavado las negociaciones climáticas de la ONU durante el año pasado incluyen Irán, Kuwait y Arabia Saudita, estados donde el espacio cívico es calificado como reprimido o cerrado por el CIVICUS Monitor, lo que significa que es casi imposible que existan y funcionen las OSC independientes y la participación pública y la disidencia están severamente restringidas. Sin la presión de la rendición de cuentas pública, los estados pueden tomar decisiones que privilegian los intereses de la élite en lugar del bien público.

Las ediciones anteriores del Informe sobre el estado de la sociedad civil han demostrado cómo los estados que restringen a la sociedad civil en el país traen consigo esas mismas estrategias de represión en su papel en la gobernanza de las instituciones internacionales. El impacto de las fallas en la protección de la movilización pública, a nivel nacional y local, también es evidente en el nivel de cooperación climática global y regional donde los estados que actúan habitualmente para prevenir el activismo ambiental nacional también han luchado para descarrilar las conversaciones climáticas de la ONU y deshacer el frágil progreso de el Acuerdo de París.

Incluso cuando el espacio cívico no está cerrado, rara vez está completamente abierto, y en muchos países se está deteriorando actualmente. Este es el caso en otros estados que han actuado para dismantelar la cooperación climática global y regional durante el año pasado, incluidos Australia, Brasil, Rusia y los Estados Unidos. Cada uno de estos estados ha tomado acciones específicas que apuntan al activismo ambiental. A menudo se han centrado en los derechos indígenas y la tutela indígena de los recursos naturales.

Después de negarse a respaldar el informe histórico del IPCC de 1,5 grados centígrados en la COP 24, varios estados dependientes de combustibles fósiles, incluidos Irán y Arabia Saudita, se aseguraron de que el informe fuera excluido de las negociaciones formales en Bonn, Alemania, en julio de 2019. Otros estados, incluido Brasil, han tomado medidas decisivas para socavar los créditos de carbono que sustentan el Acuerdo de París.

En agosto de 2019, a pesar del consenso de todos los demás estados de las Islas del Pacífico, el primer ministro australiano, Scott Morrison, presionó a los líderes del Pacífico para que eliminaran todas las referencias al carbón, el limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados y los planes para alcanzar emisiones netas cero para 2050 de los documentos finales del Foro de las Islas del Pacífico 2019. La reunión tuvo lugar en Tuvalu, una nación donde el calentamiento de 1.5 grados centígrados constituirá una amenaza existencial.

Australia tomó esta posición de línea dura a pesar del hecho de que los agricultores australianos estaban luchando contra la sequía más fuerte registrada en la historia y los incendios forestales estaban fuera de control. Después de generar intensas críticas sobre el papel de Australia en la cumbre, el primer ministro Morrison revivió rápidamente sus ataques contra la organización de defensa Get Up!, uno de los críticos más destacados de las políticas climáticas del gobierno australiano.

ESTUDIO DE CASO: BRASIL: CONSECUENCIAS LOCALES Y GLOBALES

Bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, Brasil ha tomado numerosas medidas extremas con consecuencias preocupantes para la acción climática y los derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional.

A nivel internacional, poco después de asumir su presidencia, Bolsonaro anunció que Brasil ya no sería sede de la COP 25 en 2019. Bolsonaro ha dicho que el Acuerdo de París es parte de una conspiración de la ONU para “robar la soberanía de la Amazonía”. En el cargo, reestructuró el Ministerio de Relaciones Exteriores para extinguir los departamentos responsables de coordinar la política internacional sobre medio ambiente y cambio climático. Aunque Brasil no ha abandonado el Acuerdo de París, su falta de cumplimiento ya se está sintiendo. Brasil lidera la idea de introducir una laguna en el comercio de carbono, que algunos diplomáticos creen que acabaría con el Acuerdo de París. También se ha negado a ratificar el Acuerdo de Escazú, que habría proporcionado protecciones exigibles internacionalmente para los pueblos indígenas y otros activistas que protegen la Amazonía.

A nivel nacional, las acciones de Bolsonaro han demostrado claramente la conexión entre los ataques contra los defensores del medio ambiente y la degradación del medio ambiente. La so-



ciedad civil local advirtió que la narrativa del gobierno alienta a los madereros, mineros y ganaderos, que sostienen que la conservación del medio ambiente obstaculiza el desarrollo del país. A medida que la indignación internacional creció por los peores incendios en años registrados en el Amazonas en 2019, Bolsonaro culpó infundadamente a los grupos ambientalistas, alegando que habían comenzado los incendios. Con aquellos que practican la tala ilegal, la minería y la

ganadería empoderados por la certeza de la impunidad, las amenazas a los defensores ambientales e indígenas han aumentado, según lo informado por el CIVICUS Monitor.

Además, el anuncio de cambios en el Fondo Amazonas de Brasil, que incluye medidas para excluir a la sociedad civil, generó una controversia con los países donantes, Alemania y Noruega, que ha paralizado efectivamente los proyectos en curso del Fondo para prevenir, monitorear y reducir la deforestación en este ecosistema vital. Según el proyecto de Mongabay de monitoreo del Amazonas, la deforestación en el Amazonas brasileño está en camino de ser la más alta en más de una década.

Mientras tanto, mientras algunos estados prometieron en la Cumbre de Acción Climática aumentar los procesos de consulta a la sociedad civil y los jóvenes en sus políticas climáticas, Brasil ha cerrado docenas de consejos participativos sobre política social y ambiental, incluidas sus comisiones sobre bosques y biodiversidad, y ha interrumpido el Consejo de Derechos de los Niños. Incluso cuando los consejos no se han cerrado, el gobierno ha reducido la cantidad y calidad de la representación de la sociedad civil en ellos, dejando a la sociedad civil sistemáticamente excluida de los procesos de participación.

ESTUDIO DE CASO: EL ACUERDO DE ESCAZÚ: UNA ACCIÓN CLIMÁTICA EFECTIVA DEBERÍA GARANTIZAR UN AMBIENTE SEGURO PARA LOS ACTIVISTAS CLIMÁTICOS

El 4 de marzo de 2018, 24 estados de América Latina y el Caribe adoptaron el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. El acuerdo nació como un reconocimiento de la necesidad de una mejor democracia ambiental en la región y de contrarrestar el espiral de violencia contra los defensores del medio ambiente.

El Acuerdo de Escazú se inspiró en la Convención de Aarhus adoptada en Europa en 1998. Escazú adopta el modelo de la Convención de Aarhus de tres pilares de democracia ambiental: 1) el derecho de acceso a la información 2) el derecho de participación 3) el derecho a acceder a la justicia en materia ambiental.

También agrega un nuevo pilar sobre los derechos de las personas defensoras de derechos humanos ambientales, lo que convierte al Acuerdo de Escazú en el primer instrumento vinculante en el mundo que incluye compromisos específicos para la protección de los defensores ambientales.

El artículo 9 crea un régimen de protección para las personas defensoras del medio ambiente articulado en tres niveles. Según este régimen, las partes del Acuerdo deben: Garantizar un entorno seguro para que actúen las defensoras; Tomar medidas apropiadas y efectivas para reconocer y proteger sus derechos; Tomar medidas para prevenir, investigar y enjuiciar los ataques contra las defensoras del medio ambiente.

Las negociaciones del Acuerdo de Escazú también fueron significativas porque la sociedad civil participó directamente en la mesa de negociaciones con los estados, presentando propuestas que influyeron directamente en el resultado del proceso.

El Acuerdo se abrió a la firma el 27 de septiembre de 2018, durante la Asamblea General de la ONU. A octubre de 2019, ha sido firmado por 21 estados y ratificado por seis: Bolivia, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

El Acuerdo de Escazú es también una herramienta importante para promover y garantizar la acción climática. Para los países de América Latina, el hogar de la selva amazónica, garantizar el acceso a la información ambiental, la participación, la justicia y un entorno seguro para las personas defensoras deberían ser pasos clave para cumplir con sus compromisos climáticos.



Los manifestantes en la huelga climática de septiembre de 2019 en Santiago, Chile, llevan una pancarta que dice: ¡Escazú ahora!

Crédito: Getty Images / Agencia Makro / Colaborador

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES PARA ESTADOS

1. Todos los estados miembros de la ONU deben suscribirse al compromiso de la línea de Compromiso Juvenil y Movilización Pública, e informar periódicamente sobre su progreso “para consultar a los jóvenes al formular y diseñar políticas, planes y leyes de acción climática”.
2. Los codirectores de la línea, los gobiernos de Irlanda y las Islas Marshall, también deben tomar medidas para garantizar que los estados miembros de la ONU cumplan con sus responsabilidades de proteger las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión que son esenciales para la movilización pública, incluso mediante la creación de nuevos compromisos a este efecto.
3. Los estados deberían reconocer, vincular y apoyar los mecanismos que ya existen para garantizar la rendición de cuentas, incluido el Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe.
4. Los estados partes en el Acuerdo de París deben cumplir con su compromiso de respetar, promover y considerar los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas al tomar medidas para abordar el cambio climático a través de mecanismos de información y retroalimentación.
5. Los estados deben reconocer y respetar el papel de los defensores ambientales de los derechos humanos en sus compromisos climáticos y garantizar un entorno seguro y propicio en el que todos los defensores de los derechos humanos, particularmente aquellos que enfrentan formas múltiples e interseccionadas de discriminación y desigualdad, estén efectivamente protegidos.
6. Para garantizar una acción climática efectiva, los estados deben garantizar un espacio seguro para que los defensores y activistas actúen y defiendan sus derechos sin temor a la violencia, la estigmatización, la criminalización, la obstrucción o el acoso legal y administrativo. Los estados deben proteger las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de conformidad con sus compromisos internacionales de derechos humanos y el derecho constitucional.

RECOMENDACIONES PARA ESTADOS ANFITRIONES DE REUNIONES DE LA ONU

1. La ONU debe garantizar que todos los estados que auspician negociaciones climáticas se comprometan a garantizar las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de los participantes y observadores de la sociedad civil y cumplir con las pautas para garantizar la participación de las personas.
2. Los estados que deseen organizar una reunión de la COP deben demostrar su compromiso con los derechos humanos y la participación de las personas, y mostrar liderazgo a nivel mundial y regional en temas climáticos.
3. Los estados anfitriones de las reuniones de la COP deberían mostrar su liderazgo en la acción climática al comprometerse y proteger eficazmente a los activistas ambientales y climáticos a nivel nacional.
4. Para garantizar un acceso equitativo a las reuniones de las Naciones Unidas, en particular para los delegados de países donde las personas tienen dificultades adicionales para acceder a las visas, el registro para las reuniones de las Naciones Unidas debe estar abierto y aprobado de forma continua para los solicitantes elegibles y debe comenzar al menos tres meses antes de que se realice .

RECOMENDACIONES PARA LA SOCIEDAD CIVIL

1. Dentro de los movimientos globales, la sociedad civil debe garantizar que los movimientos de base y de primera línea estén en el centro de las decisiones estratégicas y la acción climática. RECURSOS ÚTILES: [Los principios de Jemez para la organización democrática \(En inglés\)](#); CIVICUS: [Transfiriendo el poder a movimientos de base: hallazgos de consultas con activistas y donantes](#).



CONTÁCTANOS:

OFICINA CENTRAL

25 Owl Street, 6th Floor
Johannesburgo,
Sudáfrica,
2092
Tel: +27 (0)11 833 5959
Fax: +27 (0)11 833 7997

UN HUB: NUEVA YORK

205 East 42nd Street,
17th Floor
Nueva York, Nueva York
Estados Unidos
10017

UN HUB: GINEBRA

11 Avenue de la Paix
Geneva
Suiza
CH-1202
Tel: +41 (0)22 733 3435



www.civicus.org



info@civicus.org



[/CIVICUS](https://www.facebook.com/CIVICUS)



[@CIVICUSAlliance](https://twitter.com/CIVICUSAlliance)